



NUE 234-A-2019 (DH)

López Acevedo contra Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con seis minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte.

Descripción del caso:

Marco Antonio López Acevedo, en adelante “el apelante”, recurrió en apelación ante este Instituto de la resolución de referencia RSI-MTPS-0172-2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Oficial de Información de la **Ministerio de Trabajo y Previsión Social** (en adelante **MTPS**), quien denegó información consistente en:

- 1) Copia simple de la documentación presentada al Jefe de Organizaciones Sociales del MTPS, que contiene el acta de asamblea y el escrito para presentar documentos, para la inscripción de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla, que se abrevia SITRAMSAT.
- 2) Copia simple de la nómina certificada de todos los afiliados que están solventes y vigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla, que se abrevia SITRAMSAT.
- 3) Copia simple de la nómina que contiene la asistencia de las y los afiliados solventes y vigentes del SITRAMSAT, a la asamblea de elección realizada el día sábado 27 de abril de 2019.
- 4) Copia simple de las once constancias de trabajo que fueron presentadas al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de cada una de las personas que conforman la junta Directiva del



SITRAMSAT que resultaron electos en la Asamblea Ordinaria de elección en fecha 27 de abril de 2019.

Al respecto, la Oficial de Información del MTPS resolvió denegar lo solicitado por tratarse de información clasificada como confidencial, pues según el informe rendido por la Directora General de Trabajo, a través del Jefe del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales de ese Ministerio, se requiere el consentimiento expreso de sus titulares para su divulgación, esto de conformidad a los artículos 6, 24 letra “c”, 25 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); por tanto, la misma debe ser resguardada y custodiada por la oficina que la posee.

Por su parte, López Acevedo manifestó su inconformidad con dicha resolución, pues considera que se trata de información pública; además, señaló que dicha información la está solicitando en su calidad de miembro del SITRAMSAT, por lo que tiene el derecho habilitado para requerir información.

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado José Alirio Cornejo Najarro para instruir el procedimiento y proponer el proyecto de resolución. No obstante, como hecho notorio de su fallecimiento, el caso fue reasignado a la Comisionada **Daniella Huevo Santos** a efecto de dar continuidad al caso.

El informe justificativo al que se refiere el Art. 88 de la LAIP, fue suscrito Haydee Margarita Bolaños Beltrán, en su calidad de apoderada especial del señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, adjuntando la documentación de acreditación correspondiente. En dicho informe manifestó en lo medular: i) que respecto a la solicitud de una explicación escrita del procedimiento legal utilizado para inscribir a la Junta Directiva de SITRAMSAT, este procedimiento de inscripción de juntas directivas sindicales es realizado de conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo o la Ley del Servicio Civil, careciendo de un manual o instructivo que explique el procedimiento legal, y que no es posible entregar al solicitante por no existir documento, por lo que la Unidad de Acceso a la Información actuó conforme a lo estipulado; 2) que en cuanto a la solicitud de la documentación presentada al Jefe del Departamento Nacional de Organizaciones Sociales consistente en el escrito que inició el procedimiento, Acta de Asamblea General donde se realiza la elección de la junta directiva,

nómina de asistencia a la Asamblea General celebrada el 27 de abril del año 2019, nómina de afiliados al sindicato y constancias de trabajo de los miembros de la junta directiva de SITRAMSAT, esta no puede ser entregada por contener información clasificada como confidencial de conformidad a los artículos 24 y 25 de la LAIP; 3) que toda la información solicitada por el apelante contiene números de documentos únicos de identidad, copias de documentos únicos de identidad donde constan las direcciones de residencia de sus portadores, nombres completos, puestos de trabajo, y para el caso particular de las constancias de trabajo, estas contienen salarios devengados por los trabajadores; lo cual considera el Ministerio que es información confidencial puesto que contiene datos personales que requieren el consentimiento de su titular para la difusión según el artículo 24 y 25 de la LAIP; 4) que por esa razón no puede entregarse la información solicitada de manera completa, sin menoscabar el Derecho a la Intimidad de los propietarios de la información, es por ello que consideran que el actuar del oficial de información fue apegado a la Ley.

Posteriormente, el apelante **Marco Antonio López Acevedo** remitió a este Instituto escrito por medio del cual realizó el ofrecimiento de medios probatorios que no constan en el expediente administrativo, requerimiento que evacuó en los siguientes términos: 1) que toda la información solicitada al **MTPS** es de carácter público, por tratarse de información generada por un ente obligado, la cual es relativa a las personas que conformaron la junta directiva electa el 27 de abril de 2019, y cuya publicidad no está limitada al grado de no extender si quiera (*Sic.*) la versión pública de lo pedido; 2) que puede garantizarse la protección de datos bajo la forma de anonimato, por lo que de esta manera no aparece restricción alguna en que se hubiere sustentado la decisión administrativa de la denegatoria de información; 3) que la información referida a aquellas personas o miembros de la junta directiva resulta de vital trascendencia en virtud de la publicidad, ya que las personas que han pretendido presentarse como miembros de la Junta Directiva de SITRAMSAT son personas que ya no mantienen relación alguna con la Municipalidad de Santa Tecla. Para la acreditación de lo anterior ofrece como prueba: una constancia extendida por la Jefe de Administración Personal Eugenia Cortez (un folio útil); 4) que es cuestionable que el MTPS este incorporando a Registros Públicos, datos de exempleados de la Alcaldía de Santa Tecla, con el agravante de estar utilizando o instrumentalizando a sus propias dependencias



institucionales, como la Unidad de Acceso a la Información Pública del MTPS, para no otorgar datos pedidos, valiéndose de argumentos legales de confidencialidad que no son aplicables al caso de autos. Para reforzar su postura, ofreció prueba documental y testimonial que será relacionada más adelante.

La audiencia oral se llevó a cabo de manera virtual en la fecha y hora señalada, por medio de la plataforma “Meet” de Google, con la comparecencia del representante legal de la parte apelante, señor **Víctor Manuel Tobar Díaz** y la apoderada especial del ente obligado, licenciada **Haydee Margarita Bolaños Beltrán**, quienes manifestaron no contar con incidentes que plantear para la no realización de la audiencia.

En la etapa de ofrecimiento de prueba, la parte apelante ofreció la siguiente documentación: i) “Constancia extendida el trece de diciembre de dos mil diecinueve, por Eugenia Cortez, Jefe de Administración de Personal de la Alcaldía de Santa Tecla”; ii) “Constancia extendida el trece de diciembre de dos mil diecinueve, por Eugenia Cortez, Jefe de Administración de Personal de la Alcaldía de Santa Tecla”; iii) “Escrito de inconformidad de parte del apelante por la acreditación de miembros de junta directiva de SITRAMSAT por parte del Jefe de Organizaciones Sociales MTPS”. Asimismo, ofreció como prueba: iv) el testimonio de los señores: Balmoris Chávez y Carlos Ernesto López Méndez.

Por su parte, la apoderada del MTPS, ofreció como prueba documental: “Certificación de las resoluciones relativas o los procesos ventilados en el Juzgado Segundo de lo contencioso Administrativo de las siguientes personas: Elexis Marilan Hernández, Kenia Marisela Domínguez de Gámez, Jhoni Ulises Orellana y Walter Elías Delgado Mejía, los cuales son: a) Resolución con referencia 00353-18-ST-COPA-2CO 230-PA-18 de las diez horas con veinticinco minutos del catorce de marzo de dos mil diecinueve; b) Resolución con referencia 00352-18-ST-COPA-2CO 229-PA-18 de las catorce horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve; c) Resolución con referencia NE: 00310-18-ST-COPA-1CO(1) Ref. Interna: 186'PA'18'1 de las quince horas con treinta y dos minutos del trece de marzo de dos mil diecinueve; y, d) Resolución con referencia NE: 00191-18-ST-COPA-1CO(4) de las nueve horas y seis minutos del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

6

Luego de correr traslado a ambas partes y escuchar los argumentos expuestos por cada una de ellas, el Pleno procedió a deliberar sobre la admisibilidad de la misma, teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y utilidad de la prueba, de conformidad a los Artículos trescientos dieciocho y trescientos diecinueve del Código Procesal Civil y Mercantil. Finalmente, el Pleno decidió rechazar los elementos probatorios ofrecidos por ambas partes, de conformidad al Artículo trescientos dieciocho y trescientos veinte ambos del Código Procesal Civil y Mercantil, expresando los motivos de su decisión y la debida fundamentación para cada uno de los elementos aportados.

En la fase de alegatos, la parte apelante ratificó sus argumentos. En ese sentido, pidió concretamente que este Instituto ordene la entrega de la información solicitada, o en su defecto en versión pública.

Por su parte, la representación del **MTPS** ratificó los argumentos expuestos en el informe de ley, agregando que no se entregó debido a que al tratarse de información de carácter confidencial, la misma consigna datos personales de los afiliados; y finalmente, ratificó la resolución emitida por la oficial de información objeto de impugnación en este procedimiento.

Análisis del caso:

Para el análisis que nos concierne, este Instituto ha determinado su pronunciamiento respecto a si la información solicitada es de carácter confidencial o no. En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) breves consideraciones sobre los límites al derecho de acceso a la información pública (DAIP); y, (II) análisis del caso en torno a la naturaleza de la información solicitada y la posible obligación de entregarla.

I. La LAIP establece los límites a la entrega de información en poder de los entes obligados, los cuales incluyen la información reservada y confidencial. Por esta última se entiende aquella que consiste en “información privada en poder del Estado, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido”, como bien podrían ser el derecho a la intimidad personal, al honor o a la autodeterminación informativa (Art. 6 letras a, b y f de la LAIP).



El derecho a la autodeterminación informativa tiene por objeto preservar la información de las personas tanto físicas como jurídicas que se encuentra contenida en registros públicos o privados frente a su utilización arbitraria, sin que necesariamente se deba tratar de datos íntimos. Desde esa perspectiva, el ámbito de protección del aludido derecho no puede entenderse limitado exclusivamente a determinado tipo de datos —es decir, los sensibles o íntimos— pues, lo decisivo para fijar el objeto que con este se busca conservar es la utilidad y el tipo de procesamiento que de la información personal se haga.

De acuerdo con el Art. 58 letra “b” de la LAIP, este Instituto tiene el mandato de garantizar tanto el debido ejercicio del DAIP como la protección de la información personal, por lo que cada caso concreto debe analizarse prolijamente a efecto de establecer las medidas que concilien y ponderen ambos derechos.

Dado que la controversia se centra en determinar si la información solicitada es confidencial o no, este Instituto deberá pronunciarse previamente si el caso en análisis se ubica en el supuesto regulado en el Art. 24 letra “c” de la LAIP y luego, si procede la elaboración de una versión pública de la información, de conformidad al Art. 30 de la LAIP.

II. En el caso que nos ocupa, el apelante solicita tener acceso a documentación correspondiente a un sindicato, específicamente del “Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla”, que se abrevia SITRAMSAT.

A. El art. 6 letra “a” de la LAIP define a los “datos personales” como “*la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga*”. De igual forma, la letra “a” del mismo artículo define a los “datos personales sensibles”, como: los que corresponden a una persona en lo referente a – entre otros – su afiliación sindical.

En ese sentido, la afiliación sindical, como manifestación de la libertad sindical, indica que una persona trabajadora —del sector público o privado— o empleadora, es o fue miembro de un sindicato, federación, confederación o de una organización internacional de trabajadores o empleadores. Esta información, de acuerdo al

Art. 6 letra "b" de la LAIP, es un dato personal sensible, de manera que solo corresponde a sus titulares conocer sobre dichos datos; y, solo ellos, sus representantes legales y apoderados pueden acceder a los mismos.

El MTPS posee ese tipo de información en el ejercicio de sus facultades legales, por lo que debe utilizarla exclusivamente para el cumplimiento de sus fines institucionales y adoptar medidas que protejan la seguridad de esos datos; así como respetar la prohibición de difundirlos, distribuirlos o comercializarlos, salvo que haya mediado el consentimiento expreso y libre de los titulares o que se trate de aquellos casos en que no se requiera tal consentimiento, de conformidad con los Arts. 32, 33 y 34 de la LAIP.

En esa línea, de acuerdo a los argumentos expuestos por el MTPS durante la tramitación del presente procedimiento, dicho ente obligado ha mantenido su postura respecto a que la información solicitada es de carácter confidencial, pues consigna datos personales de los afiliados al SITRAMSAT.

B. Ahora bien, corresponde hacer mención del criterio resolutivo emitido por este Instituto, referente a la confidencialidad de los nombres de los miembros de la Junta Directiva de un sindicato es información confidencial; mismo que fue adoptado en la resolución definitiva de las once horas y cinco minutos del trece de octubre de dos mil quince, en el procedimiento de apelación bajo referencia NUE 81-A-2015 (CO), a saber:

"A juicio de este Instituto con la entrega de los listados de afiliados y miembros de la Junta Directiva y acta de constitución del SETA se estaría divulgando información personal sensible, que vulneraría la finalidad de la utilización de esos datos por el MTPS, poniendo en peligro otros derechos de índole laboral" (Cursivas propias).

"[...] los titulares de la información son las personas cuya afiliación sindical se pretende conocer, por lo que corresponde a ellos o a sus representantes legales otorgar el consentimiento para proporcionarlos. A pesar de ello, la decisión de la Oficial de Información del MTPS de denegar la información solicitada es justificada, por ser confidencial, ya que se trata de datos personales sensibles".



C. Expuesto todo lo anterior, es importante analizar en este punto, que si bien ya existe un precedente por parte de este Instituto en el caso bajo referencia NUE 81-A-2015 (CO), mismo que dio lugar a la confirmación de la confidencialidad de la información relativa a los miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA (cuyas siglas son “SETA”), es decir, a la confidencialidad de los nombres de los miembros de un sindicato del sector público (cuyos miembros son servidores públicos), ello no implica que este Instituto deba ceñirse estrictamente a dicha línea resolutive - o auto precedente - , pues como ya bien lo ha establecido la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia, “...el respeto a los precedentes – como manifestación específica de la seguridad jurídica y el sometimiento de los jueces al ordenamiento jurídico – no significa la imposibilidad de cambiarlos...”¹. También ha establecido la misma jurisprudencia, que el único requisito para cambiar válidamente el auto precedente, es que: “No obstante, para ello se exige que el apartamiento de los precedentes esté especialmente justificado –argumentado– con un análisis crítico de la antigua jurisprudencia, que también es susceptible de ser reinterpretada”²,

La ruptura del *stare decisis* sugiere un expreso señalamiento de los errores interpretativos de la decisión anterior que se plantea como precedente. Señalar la parcialidad del contexto de la anterior interpretación es una condición necesaria para dotar a la nueva decisión de fuerza argumental y para que satisfaga el estándar de justificación que el cambio de jurisprudencia reclama³.

En ese sentido, en la jurisprudencia comparada se admiten, entre otros supuestos, como circunstancias válidas para modificar un precedente o alejarse de él: estar en presencia de un pronunciamiento cuyos fundamentos normativos son incompletos o erróneamente interpretados; el cambio en la conformación subjetiva del Tribunal; y que los fundamentos fácticos que le motivaron han variado sustancialmente al grado del volver incoherente el pronunciamiento originario, con la realidad normada⁴.

¹ Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de Inconstitucionalidad 1-2010 del 25 de agosto de 2010.

² Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de Amparo 1-2011 del 19 de diciembre de 2012.

³ Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resolución de las ocho horas con veintidós minutos del día 23 de enero de 2019, en el proceso de Amparo 303-2018.

⁴ *Ibidem*

En esa línea, en primer lugar – como hecho notorio – es la nueva conformación subjetiva del Pleno de este Instituto; en segundo lugar, es que la interpretación realizada en la resolución de referencia NUE 81-A-2015 (CO), a nuestra consideración fue una interpretación que no consideró exhaustivamente, un verdadero juicio de ponderación que llevara a concluir que al tratarse de un sindicato del sector público, podría existir un interés público ya que sus miembros son servidores públicos, a diferencia de los sindicatos del sector privado.

Por lo tanto, este Instituto estima oportuno, conforme a lo anterior y a la sana crítica, modificar el criterio sostenido anteriormente, en la forma que se explicará a continuación:

Respecto de los nombres de los miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT), este Instituto considera que dichos nombres no son susceptibles de ser catalogados como confidenciales, en tanto estamos ante información de un sindicato del sector público cuyos miembros son servidores públicos; lo cual implica que existe un interés público por conocer, si quienes ostentan la calidad de directivos sindicales son efectivamente empleados activos de esta institución, y desde esa óptica, si estos cumplen efectivamente con sus funciones inherentes al cargo público que desempeñan.

La Junta Directiva de cualquier sindicato debe inscribirse ante el Departamento de Organizaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bajo esa lógica, los directivos sindicales buscan justamente ese reconocimiento con ese trámite de ley (Código de Trabajo); es decir, que se les identifique como representantes de los intereses de los empleados de dicha Alcaldía, independientemente estos estén o no afiliados al sindicato; por lo que, este reconocimiento lleva implícita una publicidad con relación a sus nombres, en tanto como ya se mencionó, representan intereses de sus afiliados quienes también son empleados públicos. Por tanto, la revelación de su identidad ya se encuentra amparada por la misma norma rectora en la materia.

D. Entonces, de acuerdo al razonamiento anterior, este Instituto estima que la información solicitada debe ser tratada de la siguiente manera:



Requerimiento 1: “copia simple de la documentación presentada al Jefe de Organizaciones Sociales del MTPS, que contiene el acta de asamblea y el escrito para presentar documentos, para la inscripción de la junta directiva del SITRAMSAT”.

Con relación a este ítem, este Instituto advierte que si bien es información en poder del ente obligado, también estima que la misma debe de consignar los nombres de los afiliados al SITRAMSAT que participaron a dicha asamblea para la elección de miembros de junta directiva, por lo que, sus nombres constituyen datos personales sensibles, en tanto ostentan la calidad de miembros sindicales, y en tal sentido, es información sujeta a confidencialidad de conformidad al art. 24 letra “b”, por lo que no puede revelarse sin el consentimiento de los mismos.

No obstante, dicha documentación puede ser entregada en versión pública, de conformidad al art. 30 de la LAIP, es decir, omitiendo de dicho contenido datos personales y datos personales sensibles, tales como: nombre de los afiliados, números de documentos únicos de identidad, números de identificación tributaria, firma, entre otros que pudieran aparecer consignados en dicha documentación y que sean susceptibles de ser protegidos.

Ahora bien, como ya se motivó en los párrafos que anteceden, la confidencialidad no aplica para los nombres de los miembros de la Junta Directiva, pero únicamente en lo relativo a su nombre y el cargo que desempeñan dichos directivos en la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, pues como ya ha sostenido este Instituto en otras resoluciones, el nombre y cargo de un servidor público es información pública (incluyendo el salario), pues conocer esos datos permite la contraloría social respecto del quehacer del aparato estatal.

Requerimientos 2 y 3: “copia simple de la nómina certificada de todos los afiliados que están solventes y vigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla, que se abrevia SITRAMSAT”, y, “copia simple de la nómina que contiene la asistencia de las y los afiliados solventes y vigentes del SITRAMSAT, a la asamblea de elección realizada el día sábado 27 de abril de 2019”:

En el caso de estos requerimientos, también se advierte que los mismos contienen los nombres de los afiliados del SITRAMSAT, entre otros datos como señalar quienes están solventes y vigentes en dicho sindicato, y los que asistieron a la elección realizada el día

sábado 27 de abril de 2019. En tal sentido y a criterio de este Instituto, esta documentación posee datos relacionados a la filiación sindical de los miembros de SITRAMSAT; en consecuencia, es procedente confirmar lo resuelto por la Oficial de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social **únicamente** para estos requerimientos. No cabe ordenar la entrega de la misma en versión pública en tanto su contenido carecería de sentido y congruencia, pues como ya se mencionó, todos son datos relacionados a la filiación sindical, los cuales están sujetos a ser resguardados por su carácter de confidencial, de conformidad a los ya citados artículos 24 letra "c" y 6 letra "b". Asimismo, el ordenar la entrega de estos documentos significaría un agravio a sus titulares (miembros sindicales) por revelar sus datos sindicales al ser datos personales sensibles.

Requerimiento 4: "copia simple de las once constancias de trabajo que fueron presentadas al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de cada una de las personas que conforman la junta Directiva del SITRAMSAT que resultaron electos en la Asamblea Ordinaria de elección en fecha 27 de abril de 2019".

Con relación a este requerimiento, sostenemos el criterio establecido en el requerimiento 1, en el sentido que los nombres de los miembros de la Junta Directiva del SITRAMSAT no es confidencial; por tanto, se vuelve pública. En ese sentido, el ente obligado deberá entregar las once constancias descritas en este requerimiento en versión pública, de conformidad al art. 30 de la LAIP, es decir, omitiendo de dicho contenido los datos personales de estos directivos, tales como: números de documentos únicos de identidad (DUI), números de identificación tributaria (NIT), salario neto, descuentos de planilla, entre otros datos personales que pudieran haber sido consignados en dichas constancias de trabajo, los cuales son susceptibles de ser protegidos.

En conclusión, procede que este Instituto modifique la resolución impugnada en los términos anteriormente expuestos, ordenando únicamente la entrega de los requerimientos 1 y 4 en versión pública, de conformidad al art. 30 de la LAIP, a excepción de los nombres de los miembros de la Junta Directiva del SITRAMSAT, cargo y salario nominal (únicamente), de acuerdo a los términos expuestos en la presente resolución.



3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra “d”, 90, 94, 96 letra “d” y 102 LAIP; 80 del RELAIP, y 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **RESUELVE:**

a) Modificar la resolución RSI-MTPS-0172-2019, emitida el 23 de septiembre de 2019 por la oficial de información del **Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)**.

b) Ordenar al titular del **Ministerio de Trabajo y Previsión Social** que por medio de su titular, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, gire instrucciones a su oficial de información para que entregue a **Marco Antonio López Acevedo** – o a quien se faculte para tal efecto – en **versiones públicas de lo siguiente:** *i) copia simple de la documentación presentada al Jefe de Organizaciones Sociales del MTPS, que contiene el acta de asamblea y el escrito para presentar documentos, para la inscripción de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla, que se abrevia SITRAMSAT; y ii) copia simple de las once constancias de trabajo que fueron presentadas al Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de cada una de las personas que conforman la junta Directiva del SITRAMSAT que resultaron electos en la Asamblea Ordinaria de elección en fecha 27 de abril de 2019; de conformidad a lo resuelto en el romano II letra “D” del apartado “análisis del caso” de la presente providencia.*

c) Ordenar al titular del **Ministerio de Trabajo y Previsión Social**, que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante o a quien este designe para tales efectos, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

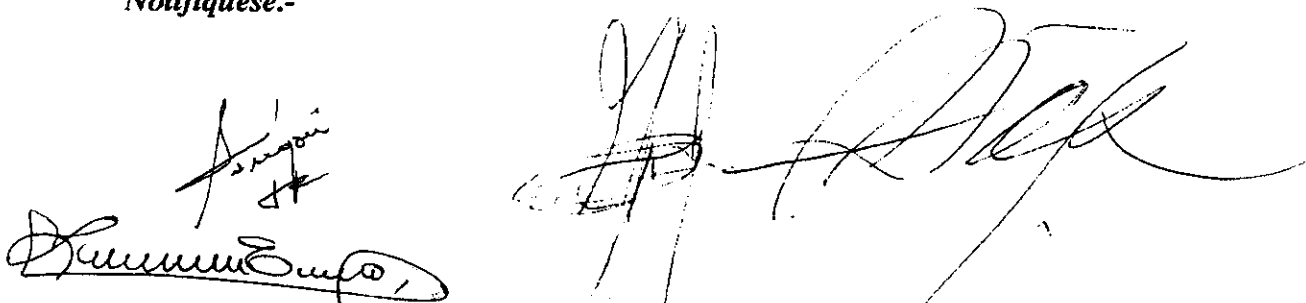
d) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa de conformidad al artículo 131 de la LPA, dejando expedito el

22
derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JH/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veinte.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



